

Walther L. Bernecker

## **¿Qué mantiene unida a España? Esfuerzos de integración y síntomas de desintegración en la España de hoy**

Al contemplar el escenario político de España y el impacto de los enfrentamientos políticos sobre los medios de comunicación durante los últimos años, uno puede tener fácilmente la impresión de que el país ya se encontraba al filo de la desintegración social. Varios elementos permiten corroborar esta impresión. Lo más evidente son las tendencias centrífugas del País Vasco: el movimiento independentista ETA aspira a una secesión de España y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), gobernante en el País Vasco entre 1979 y 2009, también persigue este objetivo, aunque de manera más solapada y mediante diferentes «planes de Estado libre». En Cataluña, forma parte de la coalición de gobierno un partido independentista y republicano, y el jefe socialista de gobierno en Barcelona tiene que hacer continuos esfuerzos por mantener a su socio dentro de la disciplina de la coalición. Mientras tanto, proyectos dirigidos contra Madrid encuentran cada vez más el apoyo de los partidos regionales nacionalistas de Galicia, y de vez en cuando también de otras regiones.

Además, se ha iniciado, desde hace algún tiempo, una «lucha por el agua» en la que las Comunidades Autónomas tratan de mantener los limitados recursos hídricos o desviarlos a su propio territorio. Prácticamente todas las distintas Comunidades Autónomas pelean entre sí, pero en muchas otras cuestiones se unen en contra de Madrid. La revisión de los Estatutos de Autonomía tiene como objetivo lograr el mayor número posible de competencias para la propia región y de esta manera disminuir el poder del gobierno central. Aliados y frentes pueden cambiar muy rápidamente, sobre todo cuando una Comunidad Autónoma tiene la impresión que otra recibe privilegios institucional o políticamente. En tal situación se hacen posibles alianzas entre gobiernos regionales formados por partidos que luchan implacablemente el uno contra el otro en el Parlamento central.

### **Fuerzas centrífugas y división social**

Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, evocaba continuamente la imagen de una España en proceso de desintegración (*España se rompe*); acusaba al Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero (desde 2004) de no estar en condiciones de mantener el país unido; y alegaba que, en caso de llegar al gobierno, ejercería una política antiterrorista mucho más dura, acabaría con la continua expansión de las competencias de las Comunidades Autónomas, realzaría los aspectos comunes de España y, con todo esto, se opondría fuertemente a la amenaza de la desintegración.

Este contexto de extrema polarización política podía imponer la impresión de que el débil Gobierno central había perdido el control sobre las diversas fuerzas centrífugas del país. Y ello, por el hecho de que los partidos nacionalistas de las «regiones “históricas”», País Vasco y Cataluña, habían pasado por procesos de radicalización, que aunque marcadamente diferentes entre sí, tenían como común denominador el deseo de un desarrollo autónomo e independiente de Madrid. Este objetivo desencadenó intranquilidad en las restantes Comunidades Autónomas, ya que no estaban dispuestas a tolerar un «camino especial» de ambas regiones, que, consideraban, ya estaban privilegiadas de por sí en muchos aspectos.

En el primer «Informe sobre la Democracia en España» de la Fundación Alternativas del año 2007, el grupo investigador llegó a la conclusión de que en el período legislativo 2004-2008, la oposición conservadora desarrolló conscientemente una «estrategia de provocación y agresión continuas», es decir, una «estrategia de crispación», que afectó negativamente el funcionamiento de la democracia en muchos aspectos: por ejemplo, en términos de convivencia de los ciudadanos, ya que se habían hecho visibles tendencias de división social, y en lo relativo a la convivencia pacífica, ya que ponía en duda los valores y el consenso democráticos.

En épocas electorales, se aplican de vez en cuando estrategias de extrema tensión política, pero si éstas se aplican a lo largo de todo un período legislativo, entonces otros factores empiezan a jugar un papel importante además de los electorales. En estos casos es crucial la falta de aceptación de la voluntad de los electores por parte de los perdedores que cuestionan la legitimidad de los ganadores. Precisamente este

aspecto se manifestó al principio del período legislativo más conflictivo de la historia de la democracia española.<sup>1</sup> Los conservadores no admitieron el triunfo electoral de los socialistas del 14 de marzo de 2004, más bien negaron su legitimidad, y lo atribuyeron a la manipulación de los electores después de los atentados islamistas del 11 de marzo. En los años siguientes, se trataba de llevar la crítica al Gobierno de la tribuna parlamentaria a los medios de comunicación y a la calle, y de esta manera dar la impresión de que las protestas en contra de la política del Gobierno partían de la sociedad misma. En términos de una clara alternativa, la oposición se mostró implacable en relación con los asuntos de Estado, especialmente los que atañen a la lucha antiterrorista, a la estructura territorial del Estado y a las relaciones exteriores: una percepción (artificial) de presunta desintegración social debía penetrar en la conciencia de los ciudadanos.

Debido a la agresiva y continua presión de la derecha, la sociedad española se dividió en dos bandos, lo que no parecía ser un buen augurio para el futuro de la democracia. El Gobierno conducía al país —en la versión apocalíptica del PP— a la «disolución de la democracia». El aspecto esencial de la estrategia de crispación estaba en el campo de la estructura territorial del Estado, especialmente en la reforma del Estatuto catalán de autonomía y en el llamado «proceso de paz» del País Vasco, que bajo los anteriores gobiernos habían quedado al margen de la polémica partidista, ya que se trataba de temas «transversales» que se escapaban a la habitual antinomia derecha/izquierda. Naturalmente, los conservadores negaron y siguen negando haber aplicado una deliberada «estrategia» de crispación. Según ellos, sólo se habían opuesto al proyecto «radical» de los socialistas, que había roto los acuerdos originales de la época de la transición y destruido las estrategias de consenso de aquella fase.

La política territorial y autonómica fue particularmente controvertida. Varias Comunidades Autónomas negociaron nuevos estatutos de Autonomía en el período legislativo 2004-2008. El proceso de reformas, iniciado por Cataluña, desató una viva polémica, en tanto que se trataba de reconocer a los catalanes como una «nación» e incluir este concepto en el nuevo Estatuto de Autonomía. Finalmente, Cataluña

---

1 Sobre las diferentes áreas políticas en las fases más intensas de la «crispación», cf. Bernecker/Maihold 2007.

sólo consiguió su reconocimiento como «nación» de forma indirecta y únicamente en el preámbulo del Estatuto (jurídicamente irrelevante). Sin embargo, el PP acusó a Zapatero de destruir la «unidad de España» con sus numerosas concesiones a los nacionalismos periféricos; se volvió a escuchar que el país «se rompía».

En la elaboración de los nuevos estatutos de autonomía, el principal objetivo del PP era combatir el Estatuto catalán —incluso se recurrió al Tribunal Constitucional—, mientras que regulaciones similares en la reforma de otros estatutos recibieron la aprobación parlamentaria de la oposición. Un examen de los procesos legislativos permite evaluar cuán significativos se han vuelto entretanto los estatutos de autonomía y la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas: en el Parlamento español se votan hoy día sólo el 9% de todas las leyes del país; el 91% se aprueba en los parlamentos de las Comunidades Autónomas; la Administración Central del Estado cuenta con 500.000 empleados y funcionarios; y las autoridades de las Comunidades Autónomas tienen más de 1,5 millones.<sup>2</sup>

En los últimos años, otra polémica de política territorial ha dividido aún más a los españoles: la que atañe al acceso al agua. Este problema vino a sumarse y a avivar el debate de los nuevos estatutos de autonomía (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, Castilla-León), en el que las distintas Comunidades Autónomas defendieron cada una su punto de vista: «Mi río me pertenece a mí, todos los demás ríos son de todos» —y no estuvieron dispuestas a permitir el acceso a los recursos de agua a una comunidad vecina—. En esta «guerra del agua», que estalló en 2007, los frentes podían discurrir por líneas muy diferentes a las de la política central. De esta manera, podían enfrentarse dos Comunidades Autónomas regidas por el mismo partido (PP o PSOE), con la misma intensidad con la que conservadores y socialistas trabajaban en conjunto en una comunidad cuando se trataba de disponer del agua de la comunidad vecina (independientemente de lealtades partidistas). El debate se producía, pues, por encima de los partidos: Castilla-La Mancha y Aragón se volvieron con vehemencia contra Valencia, Valencia a su vez contra Cataluña y Andalucía, y Andalucía contra Extremadura... Sólo las

---

2 Acerca del desarrollo del Estado de las Autonomías en 2004-2008, cf. la aportación de Hildenbrand Scheid 2008.

Baleares se mantuvieron al margen del asunto, porque no tenían que compartir el agua (potable) con otras comunidades.<sup>3</sup>

Seguramente es posible afirmar que España es, en comparación con otros países, un Estado nacional mucho menos unificado que Francia o Alemania.<sup>4</sup> En un país en que suscita más adhesión la selección de fútbol que la bandera nacional, apenas existen políticas de Estado basadas en acuerdos permanentes de las principales fuerzas políticas; si bien la política exterior ha cambiado, en los últimos lustros, con el Gobierno de turno, no está bien definido ni siquiera el concepto básico, el de interés nacional; tampoco hay políticas de Estado en justicia, descentralización o educación, por mencionar sólo tres áreas vitales en la vida del país.

El 9 de marzo de 2008 marcó el final de cuatro años de permanente campaña electoral. La primera legislatura de Zapatero se caracterizó por una división política y polarización del país como nunca antes había existido en los 30 años de democracia. Contemporáneos prudentes, como el demócrata-cristiano catalán Josep Antoni Duran i Lleida, veían en la contraposición política una continuación de las históricas «dos Españas». Con esta expresión se designa comúnmente a la confrontación de la década de 1930, que desembocó en la Guerra Civil. Tampoco en aquel entonces habían sido posibles compromisos entre los campos ideológicos: el único objetivo era destruir al otro.

### **Acercamientos políticos y regreso al centro**

En la última sesión del Congreso de los Diputados antes de su disolución, a finales de 2007, su presidente, el socialista Manuel Marín, advirtió de forma explícita que no se podía continuar envenenando la atmósfera política en el próximo período legislativo: «La sociedad no soportará de nuevo un período legislativo tan rudo». El estilo político debía cambiar, los españoles constantemente habían «sucumbido a la tentación, de ser iconoclastas y comportarse como Caín»; debían volver a la actitud de entendimiento de la Transición.

A principios de 2008, la campaña electoral del PSOE estuvo dominada por un regreso a una posición centrista. Los socialistas evitaron conscientemente temas polémicos como el aborto, la eutanasia y la relación entre el Estado y la Iglesia; en cambio, recalcaron aspectos

---

3 Sobre usos y conflictos en el espacio geográfico, cf. Breuer 2008.

4 Para los siguientes argumentos, cf. Molines 2009.

como el continuo crecimiento económico, seguridad en la sociedad y moderación en la política, o sea, temas que unían y no separaban.

También los conservadores se moderaron: los dos principales referentes de la oposición al Gobierno, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, quienes durante años habían transmitido en el Congreso de los Diputados (y fuera de él) la imagen de un PP que atacaba sin piedad, fueron relegados a un segundo plano durante la campaña electoral; el candidato Mariano Rajoy se distanció de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se había manifestado especialmente agresiva contra la política antiterrorista del Gobierno; todos los eslóganes y actuaciones de la campaña electoral debían sugerir solidez e infundir confianza.

Que en la sociedad prevalecían el deseo de moderación y el anhelo de acercarse a una posición centralizada, se pudo ver en el voto de la población española en las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 2008. Los partidos nacionalistas, que en los últimos años habían vivido un proceso de radicalización, como el PNV en el País Vasco y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Cataluña, y que abogaban abiertamente por la independencia de su territorio, fueron claramente castigados por los electores. El PNV tuvo (en comparación con 2004) alrededor de 117.000 votos menos; ERC descendió aún más y se quedó en 356.000 votos. El mensaje del electorado fue alto y claro: no estaba dispuesto a recompensar las reivindicaciones extremistas de independencia. La mayor parte de los votos que perdieron los nacionalistas fueron a parar a los socialistas.

El sensacional triunfo de los socialistas en el País Vasco y Cataluña se debió al rechazo por el electorado del nacionalismo radical en ambas regiones y a su aversión hacia el PP. Probablemente, ambos enfoques explicativos son válidos, pero además se puede señalar que los socialistas regionales representan —mucho más que otros partidos— la «identidad» de muchos vascos y catalanes, que tienen una lealtad dual y repartida. En ambas regiones, los socialistas abogan vehementemente por la profundización del Estado de las Autonomías; pero al mismo tiempo, no dejan lugar a dudas en cuanto a su lealtad a la Constitución y a España.

Sin embargo, las últimas encuestas indican que la sociedad vasca no está cada vez más dividida ni se dirige hacia el separatismo. A finales de 2008, el *Euskobarómetro* publicó los resultados más recientes:

casi el 50% de los vascos apoya una «gran coalición» de los socialistas del PSE y de los nacionalistas del PNV. Tal alianza hubiera significado un alejamiento definitivo de la política de bloques «confrontados» y del ciclo nacionalista, que tuvo su comienzo en 1998 con la firma del «Acuerdo de Lizarra-Garazi» con los nacionalistas radicales. Una coalición entre socialistas y nacionalistas en el País Vasco hubiera significado el retorno a una posición centripeta; las reivindicaciones de independencia hubieran dejado de formar parte por mucho tiempo del programa de los gobiernos vascos.<sup>5</sup> Independientemente del hecho de que en el País Vasco tal coalición no se realizó, pese a que casi la mitad de los vascos estaría a favor, pone claramente de manifiesto que las fuerzas desintegradoras no tienen mayoría en la región políticamente más problemática de España.<sup>6</sup>

La «crispación» de los últimos años ha cambiado no sólo el clima político, sino también la cultura política y los estándares de convivencia social. Obviamente, también ha dado lugar a un fortalecimiento de los polos del espectro político y ha contribuido a la desarticulación del centro; la tendencia hacia un sistema bipartidista es evidente. Sin embargo, tanto la campaña electoral del 2008, con sus formas mucho más moderadas, como los resultados de las elecciones nacionales y la agitación política en el PP como consecuencia de la derrota electoral, alimentan la esperanza de que la agresiva polarización de los últimos años no siga. A los principales partidos les ha quedado claro que la confrontación radical tiene un alto precio y que no aporta votos. La renovación de los equipos en el PP durante el año 2008 y el giro del partido conservador hacia el centro alimentan la expectativa de que la crispación no sea una condición permanente de la política española.

Cuatro meses después de las elecciones y después de que los líderes de los dos grandes partidos fueran confirmados en sus posiciones, parecía haber llegado el momento de un acercamiento político. Tanto Zapatero como Rajoy eran conscientes de que la atmósfera envenenada de los últimos cuatro años entre los dos principales partidos no se

---

5 «La mitad de los vascos apoya una alianza entre PNV y PSE frente a la política de bloques», en: *El País*, 20-XII-2008, 14.

6 Tras las elecciones vascas a principios de marzo de 2008, los socialistas formaron un gobierno en minoría con Patxi López como *lehendakari* y tolerado por el PP en el Parlamento vasco. Los dos partidos no nacionalistas han concluido un Pacto cuya duración prevista es toda la legislatura.

podía sostener; la democracia y las instituciones sufrían demasiado. Especialmente para los conservadores, esto significaba que tenían que acabar con su política de «tierra quemada» y regresar a ser una oposición responsable. A finales de julio de 2008, los dos líderes concluyeron un «Pacto de Estado» sobre cuestiones fundamentales que afectan al país. En la política antiterrorista, se acordaron cinco puntos: cooperación de los demócratas, confianza en los recursos del Estado de derecho, apoyo a las víctimas de ETA, cooperación internacional y rechazo de un precio «político» por un eventual fin de los asesinatos. La sabia decisión de los votantes unió a los dirigentes de los partidos y, por tanto, generó un acercamiento entre ellos que en los cuatro años anteriores había parecido imposible. El caso español desmiente, pues, a los escépticos que le atribuyen ninguna o sólo poca importancia al voto «formal», emitido cada par de años por los votantes, en el funcionamiento y la calidad de la democracia

### **Sobre la regulación de conflictos sociales**

Los ejemplos, presentados hasta aquí, de tensiones políticas y de esfuerzos por volver a reencontrarse ponen de manifiesto que el país se encuentra ante toda una serie de retos enormes en cuanto a su capacidad integradora; pero, según parece, también dispone de importantes potenciales de integración. Esto es válido sobre todo para las últimas décadas, cuando la tantas veces alabada transición de la longeva dictadura franquista a una monarquía liberal y democrática puede ser caracterizada de modelo exitoso, entretanto ya histórico. Ahora bien, si se contempla de manera más detenida la realidad sociopolítica de España, pronto se advierte que la desintegración social y política representa un peligro continuamente presente, y que la integración de la sociedad es bastante precaria en más de un sentido. El caso español muestra también que la integración social no se da por sí misma, sino que tiene que ser «construida» una y otra vez (cf. Imbusch 2008). Además, España tiene una cultura de debate muy desarrollada, con tonos decididamente agresivos, que sobrepasan a veces los límites del buen gusto y permiten ver una «cultura» política poco desarrollada, pero que es asimismo una crítica «inmanente», a través de la cual los dirigentes se reprochan recíprocamente haber abandonado principios y normas, cuya validez legítima reconocen de manera implícita en el reproche.



Pero mientras la forma dominante de conflicto de la ciudadanía democrática sea la de la crítica «inmanente», en esta permanente discusión pública tiene lugar, al mismo tiempo, un refuerzo indirecto de las normas y de los valores comunes (cf. Dubiel 1997).

En una sociedad moderna como la española no se puede esperar que la cohesión social surja únicamente de una esfera normativa y armoniosa de concepciones compartidas de valor. Muy al contrario, las teorías sociales sobre integración y desintegración de sociedades han reforzado las dudas con respecto a la capacidad integradora de sociedades organizadas en Estados nacionales.

Ni la solidaridad, ni el orden legítimo y un horizonte de valores compartido y obligatorio para todos pueden promover la necesaria integración, sino ésta surge ante todo de procedimientos deliberativos y discursos, de principios diferenciados y conflictos (Imbusch/Rucht 2005).

En la democracia, los debates sociales no han disminuido, sino que han aumentado. Su «superación» no se logra intentando conseguir un consenso armonioso de posiciones en conflicto —ya que, en muchos casos, aboca al fracaso—, sino por medio del «procesamiento» de los conflictos.<sup>7</sup> A fin de cuentas, así se consigue y garantiza la estabilidad social, y hasta el momento los puntos de vista contradictorios han podido reunirse en un *modus vivendi* (todavía) aceptable para todos los involucrados. Hoy, ya no se habla del utopismo clásico de las teorías sociales que postulan unidad y armonía, sino mucho más de los modos de ordenamiento desarrollados por las sociedades modernas mismas para regular sus tensiones inherentes. «Regular» tensiones y conflictos no significa solucionarlos, sino llegar a una situación «aguantable» para todos los interesados; esta situación implica «que el orden social facilit[e] a todos los grupos y fuerzas sociales las condiciones para poder representar sus intereses y de competir por ellos, aunque sea en claro desacuerdo» (Sander/Heitmeyer 1997: 455).

Las teorías sociales recientes no parten del supuesto de que las sociedades modernas y multiétnicas estén cohesionadas en primer lugar a través de una integración cultural y normativa —es decir, creando homogeneidad cultural y acuerdo político—. Ven más bien en la existencia de múltiples conflictos el «estado normal» de una sociedad. Para

---

7 En la teoría sistémica de Luhmann (1987), el enfoque central no va dirigido a la solución de conflictos, sino a «procesarlos».

que estas sociedades se mantengan unidas, se necesita ante todo una regulación exitosa de los conflictos. Pero esta regulación no tiene por meta conducir las diferencias sociales y políticas a un estado armonioso de distensión y equilibrio, sino que se entiende como un estado duradero cuya función es la de ser un modo de integración de las sociedades modernas (*ibid.*). Por lo tanto, la cohesión de una sociedad moderna como la española no se mide según cómo se armonicen sus conflictos, sino cómo se regulan. Helmut Dubiel afirma que la cohesión social no se establece superando contradicciones y conflictos, sino «civilizándolos», por lo que es posible considerar el conflicto como un modo positivo de integración. Las regulaciones conflictivas mantienen unidas, en cierta manera, a las sociedades. La permanente polémica de una sociedad democrática fomenta, como diferencia «escenificada», la cohesión, llevando a una «civilización» de los conflictos. Ya Georg Simmel afirmaba que las sociedades modernas a fin de cuentas se mantienen unidas por «conflictos limitados». En la medida en que los actores políticos debaten sobre la meta de sus sociedades, son al mismo tiempo miembros de estas sociedades. Por lo tanto, los conflictos sociales (duraderos) que se deben a diferencias e intereses contradictorios generan el espacio simbólico del «procesamiento» democrático de los conflictos. Este modelo se vuelve problemático cuando surge un conflicto social que a causa de su cualidad específica ya no puede ser «procesado» de manera democrática, sino que lleva en sí un explosivo irreconciliable. El terrorismo de ETA y la voluntad absoluta de separación de este grupo son parte de este tipo de conflictos. En la terminología de Albert O. Hirschman se trata de un conflicto «indivisible»,<sup>8</sup> para el que la sociedad no tiene modos de regulación.

También otros científicos sociales han criticado, en los últimos años, las formas tradicionales de explicar integración. Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim, por ejemplo, resaltan que ya no es posible aplicar el «corsé de valores» descrito por Talcott Parsons, debido a que la multiplicidad cultural de las sociedades modernas elimina las

---

8 Según Hirschman (1994), los conflictos «divisibles» atañen a la estructura de una sociedad moderna (por ejemplo, desigualdad o repartición de recursos), por lo que pueden ser solucionados con los mecanismos de una sociedad; los «conflictos indivisibles» son, al contrario, los que surgen de las tensiones étnicas y religiosas y no pueden ser solucionados a través de modos de «limitación» de conflictos establecidos socialmente.

bases sobre las que pueden surgir las cohesiones para comunidades de valores compartidos. Pero la diferenciación cultural no necesariamente genera descomposición social y desintegración, de la misma manera que la proximidad cultural no garantiza una convivencia pacífica (cf. Schiffauer 2008). De todas formas, la homogeneidad cultural en el caso español no puede ser aducida como argumento principal de cohesión social, porque, por un lado, el país es culturalmente heterogéneo y, por otro, gran parte de la población reacciona de manera claramente escéptica frente a todos los intentos de centralización y unificación por parte de Madrid, también y sobre todo en el sector cultural. Además, España misma se define, en el contexto del debate inmigratorio, como un país multicultural. Tanto el anterior presidente conservador José María Aznar (1996-2004) como el actual presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (desde 2004) han resaltado repetidas veces que España es un país abierto y tolerante, culturalmente diversificado, que por la inmigración de trabajadores extranjeros se enriquece no sólo económica, sino también culturalmente. Resaltar la diversidad cultural implica, al mismo tiempo, rechazar la tesis de una homogeneidad cultural.<sup>9</sup>

En el caso de una recesión prolongada también fallará el mecanismo de integración por medio de una comunidad de intereses materiales, según ha expuesto Carlos Marx. Ni la moral, postulada por Emile Durkheim ni la moralidad común en el sentido de Max Weber han logrado mantener unidas a sociedades, como tampoco el nacionalismo, el patriotismo o la fe en el progreso.

Resulta esclarecedor resumir un debate que tuvo lugar durante los años de gobierno del Partido Popular, en la segunda mitad de los años noventa. El rechazo de España como nación por los nacionalismos periféricos, dispuestos sólo a reconocer un Estado español (y no una nación española), hizo que durante el gobierno del Partido Popular la cuestión nacional se convirtiera en un amplio campo de enfrentamiento político. Con evidente respaldo político ha sido claramente reformulada en la segunda mitad de los años noventa la cuestión de la identidad nacional española y de su unidad, tanto histórica como social y políticamente, en particular por parte de algunos representantes de la disciplina histórica. Esta perspectiva ha sido la dominante en la Real

---

9 Cf., al respecto, la tesis doctoral no publicada de Kleiner-Liebau.

Academia de la Historia, que en 1997 ofrecía la publicación de una obra colectiva en la que se reunían distintas *Reflexiones sobre el ser de España*. Un carácter aún más claramente esencialista era el que mostraban las actas de un ciclo de conferencias de la Academia (*España como nación*) en las que, supuestamente «con rigor intelectual, documentación fiable y honestidad profesional», se llegaba a la simple pero tajante conclusión de que España tenía, tanto en la historia como en el presente, una «innegable condición de nación» (Laín Entralgo 2000).

Paralelamente a semejantes ejercicios de concienciación acerca de lo nacional, la pregunta sobre las debilidades históricas en la articulación de un pensamiento nacional español y sobre los orígenes de los nacionalismos alternativos en el curso de los siglos XIX y XX ha avivado un debate histórico serio del que han resultado destacables trabajos. Con todo ello se ha hecho patente que los problemas actuales no sólo se pueden atribuir al nacionalismo autoritario y culturalmente exclusivista del Estado franquista, sino que descansan en parte también sobre los déficits estructurales de integración entre las regiones.<sup>10</sup> En el debate político, sin embargo, estas matizaciones no han desempeñado un papel destacado. El gobierno de Aznar se dio cuenta de la oportunidad política de recuperar la idea de una nación española unitaria frente a las realidades sociopolíticas de la periferia a través de una unificación «desde arriba» de la historia nacional. De este modo, la ministra de Educación del Gobierno conservador, Esperanza Aguirre, anunció ya en 1996, en un discurso ante la Real Academia de la Historia, una reforma general de la enseñanza no universitaria de las Humanidades, especialmente de la Historia. Aducía como justificación que la política educativa del anterior Gobierno socialista habría conducido, a causa de su orientación fuertemente metodológica, a una marginación de la Historia como tal. Otras afirmaciones de la ministra traslucían su deseo de privilegiar la búsqueda de identificación a través de la tradición, siguiendo el ejemplo de figuras heroicas en perjuicio de la formación de un pensamiento independiente y de la capacidad de juicio individual. Pero sobre todo defendía el reforzamiento de una visión «centralista» de la historia española, especialmente dirigida contra la fragmentación regional del conocimiento y de la conciencia históricos en la enseñanza impartida por las Comunidades Autónomas (Valls 1998: 134 y ss.).

---

10 Cf., especialmente, Álvarez Junco 2001; así como Borja de Riquer i Permanyer 2001.

El anuncio de la ministra fue seguido por la formación de una Comisión de expertos que, en junio de 1997, presentó una propuesta para la revisión de los planes de estudio en la educación secundaria. Prescindiendo de otros muchos aspectos, la Comisión definió el objetivo educativo central de la futura enseñanza de la Historia: comprender y valorar el carácter unitario del desarrollo histórico de España con su variedad lingüística y cultural. Sus propuestas no tardaron en desencadenar un agitado debate público en el que se enfrentaron muy especialmente los grandes diarios, como *El País*, representante de la izquierda liberal, y el conservador *ABC*. De esta forma, en enero de 1998, es decir, pocos meses después de la publicación del proyecto de reforma,<sup>11</sup> eran ya unos 650 los artículos de opinión dedicados a esta cuestión por la prensa escrita. Muchos críticos del plan de Humanidades se sentían especialmente molestos por la defensa de la «uniformización» de la enseñanza de la Historia. De acuerdo a la interpretación de los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, así como por parte de los gobiernos regionales de Canarias y Andalucía, esta formulación contradecía no sólo sus competencias en el ámbito de la enseñanza y la cultura, sino también las supuestas realidades históricas de sus regiones. No obstante, la dependencia del Gobierno central respecto al apoyo parlamentario de los partidos regionales, especialmente del catalán *Convergència i Unió*, condujo al fracaso, en diciembre de ese mismo año, del proyecto educativo de la ministra. En vista de ello, en 1998, se creó una nueva Comisión en la que, esta vez, sí, tomaron parte los gobiernos regionales. Su tarea, sin embargo, no se tradujo en resultados concretos (Valls 1998: 138 y ss.).

Literalmente en última instancia, la Real Academia de la Historia, bajo la presidencia del modernista Gonzalo Anes, recibió el encargo de elaborar un informe sobre los cursos de Historia en las distintas Comunidades Autónomas. Este Informe fue presentado en junio de 2000 y en él, como anteriormente había hecho la ministra, la Academia criticaba la supuesta preeminencia dada a los aspectos metodológicos y didácticos de la enseñanza escolar de la Historia, frente a los que perdía claramente importancia el estudio de los hechos. Pero también en este

---

11 El borrador del Decreto para la reforma de los mínimos de la enseñanza de la Historia en la ESO, como primera fase de un Plan de Mejora de las Humanidades, fue presentado por la ministra Aguirre el 22 de octubre de 1997.

caso lo que se convirtió en detonante del escándalo fue la valoración de la enseñanza de la Historia en las Comunidades Autónomas gobernadas por partidos nacionalistas. El Ministerio de Educación establece en aquellas Comunidades con idioma propio el 55% de los contenidos educativos y un 65% en el resto de las regiones, las Comunidades Autónomas haciéndose cargo del restante 45 o 35% de los contenidos. A partir de ello, la Academia constataba en su Informe que, en determinados casos, el equilibrio entre la Historia regional y la Historia común española se había roto claramente a costa de esta última.

Los expertos admitían, ciertamente, disponer de pocos datos sobre la práctica docente en las escuelas y colegios, por lo que fundamentalmente debieron apoyar su valoración en los planes educativos y en los contenidos de los manuales empleados. Pero eran precisamente estos últimos los que, según la Academia, ofrecían un elocuente testimonio del desproporcionado relieve dado a la Historia regional. La palabra «España» no llegaba a aparecer en muchos de estos manuales. Por ejemplo, en un manual de la ESO de la Comunidad Autónoma de Galicia se dedicaban tan sólo 22 líneas a toda la Historia española de la Segunda República, la Guerra Civil y el régimen de Franco, mientras que eran veinte las páginas dedicadas a la Historia regional gallega desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Los autores del Informe de la Academia dirigieron palabras especialmente duras a la enseñanza de la Historia en las escuelas privadas vascas, las *ikastolas*. El conocimiento de la Historia que en ellas se transmitía resultaba «parcial y tendencioso», e inspirado en «ideas nacionalistas favorecedoras del racismo y de la exclusión de cuanto signifique lazos comunes». No se ponían de relieve los elementos comunes de las regiones españolas, sino las divisiones, los momentos de conflicto y tensión entre centro y periferia. La Historia de España era no obstante una «realidad innegable», y por ello, en la futura enseñanza de la Historia, concluía el Informe, debería encontrarse un nuevo equilibrio entre las perspectivas regional, nacional y global (Real Academia 2000).

La publicación de este Informe suscitó un acalorado debate en el que sobre todo fueron discutidas las posiciones de las regiones afectadas. La Academia fue especialmente criticada por sus reproches a la enseñanza de la Historia en las *ikastolas*. El director de la Academia, Gonzalo Anes, se vio incluso obligado a disculparse y a rectificarse públicamente (*El Mundo*, 01-VII-2000). Pero la crítica provino también

de otras regiones del Estado donde las conclusiones de la Academia fueron rechazadas en cuanto agresión hacia su cultura política. El reproche más duro al Informe, sin embargo, no fue tanto de naturaleza política como técnica o metodológica. Faltaba de hecho en el texto toda referencia bibliográfica a los textos en él citados, tampoco aparecía referencia alguna acerca de su difusión y consecuente representatividad. Además de ello, los expertos se habían centrado de manera evidente en algunos pocos trabajos de tan sólo dos Comunidades Autónomas, por ello la capacidad del Informe para establecer conclusiones en lo concerniente al resto del país fue seriamente cuestionada. En conjunto, el Informe de la Academia se presentaba como la mera expresión de una opinión y no tanto como una investigación seria en la materia, un diagnóstico indudablemente desagradable que tuvo que ser reconocido finalmente por los propios autores.

El desmontaje del Informe de la Academia se basó fundamentalmente en los resultados de otro estudio publicado en julio de 2001 por la Fundación catalana «Jaume Bofill». En nombre de esta Fundación, una Comisión de expertos llevó a cabo, atendiendo a las críticas hechas por la Academia, una detallada investigación de los manuales de Historia en cada una de las 17 Comunidades Autónomas. Las conclusiones de esta Comisión de expertos contradecían prácticamente en todos sus puntos las valoraciones de la Academia. En lugar de apreciar una sobrevaloración de los aspectos didácticos y teóricos, el Informe llegaba a la conclusión de que la mayoría de los contenidos didácticos todavía eran transmitidos de manera tradicional, es decir, con una enseñanza memorística. Pero, sobre todo, rechazaba la Comisión la acusación de «localismo». Los estudios individuales habrían mostrado, en lo que respecta a la regionalización de las clases de Historia en las distintas Comunidades Autónomas, que la parte permitida por ley a la enseñanza de la Historia regional no era totalmente aprovechada, ni mucho menos, dedicándose a temas regionales poco más del diez por ciento de los contenidos de los manuales de Historia, frente al 35 o 45% admitido por los legisladores. Por lo demás, las referencias políticas centrales en las clases de Historia no serían las regiones sino el Estado español y Europa occidental (Segura 2001).

Habiéndose partido de falsas premisas en la estimación del peso de la Historia de España, hubo de dejarse a un lado la cuestión del recorte de contenidos de Historia regional. En lugar de ello, el Ministerio se

limitó en enero de 2001 a una reordenación de los programas en el ámbito de los contenidos mínimos que a éste le correspondía establecer. Los cambios tuvieron, sin embargo, una naturaleza más estructural que de contenidos, aunque en el Bachillerato la asignatura obligatoria «Historia Contemporánea» fue ampliada a una «Historia de España» de todas las épocas hasta el mundo actual. Hubo que esperar además muy poco tiempo para que los enfrentamientos políticos en torno a la Ley de Calidad de la Enseñanza se superpusieran a este conflicto en torno a la organización de la enseñanza de la Historia.

Si después de estas reflexiones uno se pregunta qué mantiene unida a la sociedad española, uno se topa en la reciente Historia del país con varios eventos capaces de generar identificación que posiblemente hayan contribuido a moderar las fuerzas centrífugas y elevar la identificación con el propio país. Según encuestas representativas, forman parte de estos eventos la transición de la dictadura a la democracia, la integración de España en la Comunidad Europea y la transformación del país de un Estado unitario, gobernado de manera centralista, a un Estado cuasi-federal, el actual Estado de las Autonomías. En lo que sigue, se presentarán brevemente estos casos bajo la perspectiva de la cohesión de la sociedad española y de los modos de regulación, empleados en cada caso.

### *Ejemplo 1: Una imagen positiva de España: la transición*

En las últimas décadas, la transición ha recibido en la historiografía y en el debate público una interpretación mayoritariamente positiva. A través de los medios de masas, los historiadores han contribuido a la creación de esta imagen positiva de España. La profunda transformación política se realizó básicamente en paz, lo que ha llamado principalmente la atención de historiadores y científicos sociales. Por lo tanto, la mayoría de ellos concuerdan —independientemente de sus simpatías partidistas— en presentar el proceso de transición como una «operación modélica» y un «gran éxito histórico». Si bien se pueden criticar algunos aspectos, el éxito de la transición sobrepasa los posibles déficits con mucha diferencia. El resultado es una democracia parlamentaria que funciona, la reducción de desigualdades sociales, la construcción de un estado de bienestar, la separación entre Estado e Iglesia, la solución del problema militar, la finalización del aislamiento de España y la integración en las estructuras supranacionales de Occidente. La transición a la democracia hizo surgir



una imagen de España que trata su propia Historia de manera conciliadora. Muchos historiadores ya no ven en su Historia el «paradigma de fracaso», sino que acentúan la «normalidad» del país. Se presenta la Historia española como un caso más en la Historia europea de los siglos XIX y XX, y en comparación con otras experiencias europeas, a la española no se la puede tachar de «atípica». Muy al contrario: el transcurso de la Historia española es «completamente europeo», hay que resaltar ante todo la «normalidad» del desarrollo. Hoy no se trata de encontrar respuestas a la pregunta de por qué el desarrollo español fue un fracaso, sino al contrario, por qué ha resultado un éxito.<sup>12</sup>

El proceso de transición es remarcable ante todo sobre el trasfondo de un continuo cambio de las estructuras socioeconómicas, porque este tipo de cambio suele ir parejo, en todas las experiencias históricas, con muchas tensiones sociales y políticas. Pero España logró la transición con una sorprendente ligereza, y por eso para el historiador surgieron serias dudas con respecto a la tradicional imagen de una nación fracasada en su trayectoria hacia la modernidad. Víctor Pérez Díaz ha resaltado que la nueva democracia española no pudo tomar su repertorio simbólico ni de la época franquista ni de la fracasada Segunda República. Por lo tanto, no existía una «tradición» para fundamentar en ella la democracia parlamentaria; por eso se hacían necesarias nuevas imágenes que sólo podían resultar de la transición misma: la reconciliación nacional, los protagonistas del cambio, la Monarquía popular, la Constitución como consenso de todos los partidos, el regreso simbólico e institucional de España a Europa. La transición y sus imágenes simbólicas se convirtieron en el centro de atención para la conciencia histórica de muchos españoles.

La imagen positiva de España, para la mayoría de los españoles, es un indudable motivo de orgullo nacional, y esto tanto más cuanto que durante décadas el foco argumentativo de orientación de la Historia española había sido la Guerra Civil de 1936. Pero esta Guerra Civil fue y sigue siendo interpretada hasta hoy como el punto final dramático de toda una serie de fracasos que los españoles contemplan con vergüenza y rechazo. Finalmente, con la transición les fue dada una oferta positiva de identificación, una España de la que se podían enorgullecer y con la que podían identificarse. Pese a esto, los españoles no reci-

---

12 Cf., como ejemplo de esta historiografía, Fusi/Palafox 1997.

bieron la transición a la democracia como un regalo. Más bien, la transición es un ejemplo modélico en el que se ve que para el cambio político fueron necesarios complicados modos de regulación. En este proceso, no sólo hubo que involucrar a los diferentes partidos de la oposición democrática, sino también y sobre todo a las fuerzas reformistas del régimen franquista.

La solución finalmente adoptada renunció al desmantelamiento abrupto y unilateral del sistema de Franco y apostó, en su lugar, por una negociación transigente de las reformas, por una transición «pactada». La originalidad de la transición radicó en el hecho de que en una primera fase se desarrollara como una negociación, y que el resultado en cierto modo fue el éxito de todas las partes involucradas en esta negociación. Y en la segunda fase, después de aprobar la «Ley de Reforma Política» (noviembre de 1976) y tras la formación del primer gobierno democrático en 1977, la dinámica del cambio dependió mucho más que antes del (al principio implícito, luego explícito) consenso entre el Gobierno y la oposición política. La palabra *consenso* llegó a ser el concepto clave en todas las decisiones importantes para la transición. La idea del consenso y del pacto también subyació a la Constitución de 1978, con la que la transición en cierta manera llegó a su culminación. Esta Constitución, que tenía enorme fuerza integradora, creó unas reglas de juego que garantizaban la alternancia democrática y en el gobierno; hizo posible «el desarrollo y crecimiento de una sociedad compleja sin temor a desintegrarse a cada nuevo cambio político» (Iglesias 2008: 647). La Constitución fue pactada por una multitud de protagonistas de un vasto abanico político, que utilizaron el sentido de consenso como concepto y condición central. Años después de la transición, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, resaltó repetidas veces la importancia de las decisiones consensuadas en la vida política; según él, el «código genético» de la democracia española se compone de «los valores del consenso, de mantener el diálogo —por muy grandes que sean las discrepancias—, la voluntad de construir conjuntamente los elementos esenciales de la convivencia y un saludable miedo a la confrontación y la resurrección de las dos Españas» (cit. apud Kleiner-Liebau en prensa: 108). Esta cita recoge, si bien con otras palabras, las reflexiones de los científicos sociales acerca de las condiciones para mantener cohesionada una sociedad.

Pero la certeza de ser por fin un miembro en igualdad de condiciones de la comunidad de estados de Europa occidental no se transformó de manera automática en un sentimiento nacional fuerte y compartido por la mayoría de los españoles. De acuerdo con las conclusiones de un estudio mundial sobre culturas y mentalidades sociales, publicado en el año 2000 por la UNESCO, los españoles mostraban un sentimiento de orgullo nacional mucho más bajo que la media de los países industriales desarrollados.<sup>13</sup> Por eso no es de extrañar que, ya al poco tiempo de la consolidación política de la democracia española, surgiera la idea de utilizar la Constitución de 1978 como una fuente de identidad colectiva. A este respecto tendió a convertirse en concepto clave el de «patriotismo constitucional» (*Verfassungspatriotismus*), tomado de la politología o, con mayor exactitud, de la filosofía política alemana. Pero aunque el contexto histórico en el que este concepto surgió en Alemania se diferenciaba sustancialmente de las condiciones sociopolíticas de la España de la transición, había sin embargo una semejanza estructural. Ésta consistía en el hecho de que, tampoco en la España posterior a 1975, la idea de la nación definida en términos étnicos podía ser puesta al servicio de la legitimación del sistema político. Al igual que el nacionalismo alemán se vio desacreditado a raíz de los crímenes nacionalsocialistas, la visión tradicionalista y católica de España, asociada fundamentalmente con la cultura y lengua castellanas, también perdió, con el final de la dictadura franquista, toda autoridad y pretensión de validez,<sup>14</sup> por lo que había que buscar un nuevo consenso de valores para la política que pudiera ser utilizado como referente ideal para cada ciudadano. La propia Constitución iba a ser la base para una nueva identidad colectiva, para una cultura política «fundada en la lealtad común con los procedimientos democráticos y con los derechos fundamentales».<sup>15</sup>

La idea de un patriotismo cívico fundado en los principios de la Constitución de 1978 se enraizó en primer lugar en la izquierda socialdemócrata. El PSOE, bajo Felipe González, se apresuró a ajustar la definición de España a la nueva realidad sociopolítica del Estado de las Autonomías, proponiendo la manejable fórmula de una «nación de naciones». Esta fórmula conlleva el reconocimiento expreso de distin-

---

13 Cf. el informe de Lamo Espinosa en *El País*, 22-XI-2001.

14 Sobre el uso del concepto en Habermas, cf. Velasco Arroyo 2001: 63-78.

15 Palabras de López Calera, cit. en Lacasta-Zabalza 1999: 2.

tas naciones culturales que, siguiendo la tipología clásica de Friedrich Meinecke, se integrarían en una nación política unitaria. De este modo, la nación española debería ser liberada del lastre religioso-tradicionista del nacionalismo franquista y ser así reducida a los valores del consenso constitucional de 1978. Con ello no sólo se esperaba del patriotismo constitucional una interiorización general del orden democrático, sino también, y sobre todo, el fortalecimiento emocional de la unión política de las regiones al servicio de una solidaridad interregional que no en última instancia, teniendo en cuenta las desigualdades regionales, debería presentarse como condición básica para la supervivencia del Estado de las Autonomías.<sup>16</sup>

Hay que preguntarse hasta qué punto las libertades universales pueden resultar útiles para crear lazos emocionales en el marco de los viejos estados nacionales. Pero en el caso español lo que se ha subrayado en el debate público en torno a la posibilidad de un patriotismo constitucional han sido sobre todo sus ocultos elementos apriorísticos. Las propias bases de la definición constitucional de España, la cuestión del territorio estatal y el principio de la solidaridad interregional no pueden existir sin el recurso a ciertas presuposiciones históricas. Y esta afirmación es también válida para la definición socialdemócrata de España como «nación de naciones», una definición que recurre al supuesto preconstitucional de una unión histórica de las regiones españolas, presuponiendo con ello un consenso en un nivel totalmente distinto, el de la historia. Sin embargo, si la atención se centra en un consenso social, debe subrayarse que la visión de la historia de la derecha democrática (la del PP) también se acercó, tras la toma de poder por José María Aznar en 1996, y pese a ciertas vacilaciones, a la visión de España propuesta por la izquierda socialdemócrata. Porque, aunque el discurso del conservadurismo reformista se aferró y todavía se aferra a ideas tradicionales tales como la unidad católica, la historia imperial y el castellano como lengua nacional española, ese conservadurismo de los años noventa acabó aceptando a la nación española como una realidad plural y multicultural en la Historia y en el presente (Núñez Seixas 2001: 719-752).

---

16 El Artículo 2 de la Constitución de 1978 declara la solidaridad entre las regiones como el principio básico del Estado Español.

*Ejemplo 2: El ingreso en la «casa común Europa»*

Con la muerte del dictador, para España empezó un cambio vertiginoso, que en poco tiempo acercó política y económicamente al país a la tan deseada Europa. La transición de la dictadura a la democracia fue coronada simbólicamente con la entrega oficial de la solicitud de ingreso en la Comunidad Europea a finales de julio de 1977. Independientemente de las expectativas económicas, unidas a la adhesión, la solicitud había sido formulada en la conciencia de tomar una decisión verdaderamente histórica. En España comenzó una nueva fase de discusión sobre Europa: se equiparó la ansiada pertenencia a las Comunidades Europeas con vuelta a la «normalidad», a la «Casa Común» europea, con modernización económica y la garantía de que no sería posible una involución política. El ingreso en la Comunidad Europea debía conducir —según Joaquín Ruíz-Giménez— a una «mentalidad más abierta, dinámica y profesional», ampliar perspectivas y reforzar la predisposición a la innovación. Éste constituía para España primariamente una meta política deseable, para la cual incluso estaba dispuesta a pagar un precio económico. La cuestión de la adhesión estaba relacionada con la honra española y el reconocimiento por parte de los europeos (Frey 1984: 101). La apertura de España a Europa y la creciente aceptación de España por parte de ésta, así como el proceso de cambio interno en España se condicionaban mutuamente. Existía, por lo tanto, una correlación entre el proceso de democratización interno y el afán por romper el aislamiento exterior.

La adhesión europea de España tuvo tres funciones históricas significativas en el terreno económico, político y cultural. En el ámbito económico, anuló los tradicionales principios de funcionamiento de la economía española, acelerando la participación en instituciones europeas. Se abrió una competencia amplia y dinámica a la economía española al tomar parte en los mecanismos de la división de trabajo en Europa occidental. Ello condujo a dolorosos procesos de adaptación, por un lado;<sup>17</sup> pero, por otro, convirtió los anteriores intentos aislacionistas en reliquias del pasado. En el ámbito político, España se integró en el proceso de cooperación multilateral, con lo que recibió informaciones y el derecho a participar en decisiones que condicionan el futuro de Europa, y con él, el del mundo. Desde el punto de vista cultural,

---

17 Véase el artículo «Comunidades Europeas», en: Bernecker *et al.* 1990.

y con respecto al problema de la identidad nacional, el hecho de tomar parte en las decisiones europeas dio como resultado un afianzamiento de la solidaridad con el destino de Europa. España encontró el camino de vuelta a su destino europeo, del que había sido apartada durante el franquismo casi medio siglo.

El día de la firma del tratado de adhesión, el Rey Juan Carlos declaró ante los Jefes de Estado y de Gobierno presentes en Madrid que encarnaban «lo que el pueblo español entendía por Europa: los principios de Libertad, Igualdad, Pluralismo y Justicia, que también inspiran la Constitución Española» (*ABC*, 13-VI-1985, 1). El diario *El País* comentó: «La unión [...] a Europa detenta la significación histórica, que nos permite romper con el pesado lastre de nuestras tradiciones inciviles excéntricas e intolerantes y abrir nuevos horizontes culturales a las generaciones venideras» (12-VI-1985, 11). No cabía ninguna duda: la entrada en la Comunidad Europea significaba para España una profunda incisión histórica tras una larga fase de aislamiento conscientemente deseado o forzado, una cesura secular en sus relaciones exteriores, y una reorientación espiritual de significativas dimensiones.

El comentario de *El País* acerca de las «tradiciones inciviles» de la Historia española contiene una posible explicación para la apertura española a Europa, y la subsiguiente euforia proeuropea. La incorporación de España a la Comunidad Europea fue considerada como el fin de una época histórica directamente relacionada con la Guerra Civil y sus consecuencias. La guerra se convirtió en el suceso histórico que más claramente ejemplifica el «desfase» de España respecto al desarrollo europeo, el punto final de toda una serie de fracasados intentos de modernización. Las consecuencias de la guerra desembocaron en sentimientos de inferioridad por parte de los españoles respecto a Europa, en el aislamiento del país y en una severa escisión social. La apertura en 1975 a la democracia, al progreso y a Europa supuso un distanciamiento consciente de este pasado indeseado. No en vano un 73% de los españoles consideraban, en los años ochenta, la Guerra Civil como una época vergonzosa que debía ser olvidada (*Cambio 16*, núm. 616-619, 26-IX/10-X-1983); con ello expresaban su interés en no mirar atrás hacia la guerra y sus consecuencias aislacionistas, sino hacia su futuro europeo.<sup>18</sup>

---

18 Todos los observadores se muestran de acuerdo con tales consideraciones. Es característico de dicha postura una recensión de la Enciclopedia de historia contemporánea

Al mismo tiempo, se verificó también la continua, aunque mucho menos espectacular, incorporación del país a los estándares de las sociedades industriales de Europa occidental. Atendiendo a los ingresos per cápita, España había alcanzado, ya en 1980, el nivel de Italia, y diez años más tarde, el nivel de vida medio al Sur de los Pirineos parecía haberse acercado también al de Gran Bretaña. Pese a un menor ritmo de crecimiento y a una relativamente alta tasa de desempleo, la España de los años noventa podía ser reconocida, también desde el punto de vista socioeconómico, como una parte integral de Europa. En comparación con la imagen de una España tradicional y católica, popularizada pocos años antes por la propaganda franquista, el país experimentó prácticamente a todos los niveles unos enormes progresos que, además, se vieron acompañados por un grado reducido de tensiones políticas y sociales.

Los ciudadanos españoles han sido tradicionalmente favorables a la pertenencia de España a la Unión Europea y a la unificación europea en general (cf. Díez Medrano 1995). En el tema europeo, incluso las élites políticas de derechas y de izquierdas estaban unidas. A diferencia, por ejemplo, de los británicos o los alemanes, los españoles ven en la Unión Europea un vehículo de la modernización del país y un espacio político que permitió a España romper con su tradicional aislamiento internacional. Además, en la representación social de la Unión Europea por los españoles, el prestigio internacional de España juega un gran papel, lo que probablemente tiene mucho que ver con la decadencia económica, militar y política de España desde su apogeo

---

de España, en la que han participado notables historiadores. El crítico caracteriza la postura de los distintos autores de esta obra con la fórmula que España había sido una «frustración histórica» que mira hoy al futuro con seguridad y un optimismo relativo impensable anteriormente. Ésta era la opinión de la mayoría, según el autor. El pesimismo histórico se había articulado en el convencimiento de que en España todo llegaba tarde y mal: desde la construcción de una administración eficaz hasta la formación de una clase media, desde las estructuras estatales eficientes hasta una sociedad moderna. Tales juicios pertenecían definitivamente al pasado. Entre el lamento de la generación de los regeneracionistas y de los intelectuales, que veían a «España como problema», había surgido una fase modernizadora en la que España había vivido un cambio radical y se había integrado a Europa. Véase la crítica a la *Enciclopedia Espasa-Calpe* de Santos Juliá (ed. vol. 1 «Sociedad y política»: Salvador Giner; vol. 5 «Autonomía»: Juan Pablo Fusi, Madrid, 1989-1990), en: *El País (Libros)*, 25-III-1990, 7.

imperial y, más recientemente, con el aislamiento diplomático del régimen franquista tras la Guerra Civil.

En general,<sup>19</sup> los españoles tienen una imagen muy favorable de Europa y suelen manifestar más satisfacción con la pertenencia de su país a la Unión Europea que el conjunto de los ciudadanos de ésta, ya que la asocian con la difusión de aquellas características que admiran en los países más ricos de la Unión Europea. Pero este apoyo por parte de los españoles no se basa simplemente en el hecho de que la Unión Europea pueda aportar unos determinados principios económicos o políticos, sino más bien en expectativas de beneficios económicos o de otra índole para el país. Mientras los españoles perciban que se cumplen sus expectativas respecto a la modernización —sobre todo económica— y el aumento del prestigio internacional de España, apoyarán a la Unión Europea y estarán dispuestos a transferir cuantos poderes sean necesarios. La mayoría de los españoles está de acuerdo con ceder a la Unión funciones centrales de la soberanía, incluyendo la defensa y la política exterior.

En suma, la integración de España a la Comunidad Europea en 1986 ha sido en todos los sentidos positiva para el país. España pudo cerrar un largo capítulo de aislamiento, nacionalismo excluyente y distanciamiento del centro europeo; además, no sólo han desaparecido gran parte de esos complejos tradicionales con respecto a los europeos, sino que entretanto estos mismos califican a los españoles y en círculos comunitarios como «los prusianos del sur»; España ha sabido adaptarse a las estructuras, las políticas y normativas económicas establecidas en el seno de la Comunidad Europea de forma acelerada, transformando un sistema económico estatizado, protegido, poco competitivo y escasamente modernizado, que aún en 1981 era considerado como país receptor de ayuda exterior, en una de las primeras diez potencias económicas del mundo. Finalmente, la propia sociedad española se ha abierto a Europa de forma acelerada, viajando, hablando idiomas, negociando o estudiando, rompiendo así una situación un tanto peculiar y diferenciada impuesta por el régimen franquista durante casi 40 años.

---

19 Para lo que sigue, cf. Díez Medrano 2007.



*Ejemplo 3: El Estado de las Autonomías*

Quizá la organización territorial del Estado, como se llevó a cabo en España entre 1977 y 1982, sea el aspecto más transcendental para acercarse a la cuestión de la unidad o desintegración del país. 25 años después de la Constitución, el ponente constitucional José Pedro Pérez-Llorca definió, en una reflexión, las preocupaciones y los retos de los constituyentes de entonces de la siguiente manera:

Por una parte, era obviamente necesario abrir cauces dentro del sistema a las fuerzas y a los anhelos que durante tantos años habrían sentido como prioritaria la necesidad de hacer posible y garantizar el desarrollo de determinadas identidades. Por otro, esto había que hacerlo sin provocar ni alentar un proceso que pusiera en marcha un mecanismo de desintegración. Estaba entonces bien claro, y hoy lo está aún más, que es extraordinariamente difícil integrar en libertad un país plural con distintas raíces, pero relativamente fácil generar dinámicas desintegradoras.<sup>20</sup>

En términos de la dicotomía unidad/desintegración, el resultado del Estado de las Autonomías en su totalidad es ambiguo: por un lado hay muchos e importantes aspectos positivos, entre los que se cuenta la pacificación de los ánimos en su día, contribuyendo de esta manera a mantener la integridad territorial del Estado; por otro, las grandes posibilidades de desarrollo y de articulación de sus intereses, de las que hoy disfrutaban las Comunidades Autónomas, han llevado en más de un caso a un proceso de radicalización de los nacionalismos periféricos que elevan continuamente la tensión entre Comunidad Autónoma y Estado, en el que ven, ante todo, a su adversario con el que no quieren tener en común ni los símbolos, ni la lengua, ni la Historia, ni el futuro tratando de superar los límites que se definen por la Constitución.

Por lo tanto, se puede decir que pese a la profunda descentralización política del Estado español a favor de las distintas regiones, y especialmente de las tres «nacionalidades históricas» (la vasca, la catalana y la gallega), en algunas partes del país se han mantenido, hasta hoy, tensiones políticas entre centro y periferia. Es cierto que el establecimiento, con la Constitución de 1978, del «Estado de las Autonomías» ha supuesto la superación definitiva de un centralismo autoritario cuyas raíces históricas podían rastrearse hasta el siglo XVIII, y que debe ser considerado como uno de los factores decisivos de las

---

20 Cita del artículo de Pérez-Llorca, «¿Balance o liquidación?», apud Iglesias 2008: 659.

tendencias centrífugas de la periferia. Sin embargo, la fragilidad de ese Estado de las Autonomías y la propia debilidad de España como una «nación» unitaria en el sentido convencional del término, se hacen patentes, ante todo, por la continua actualidad del terrorismo de ETA, pero también por la sólida implantación del nacionalismo en Cataluña y en otras regiones, así como, en general, por las asimetrías del paisaje político español.

Lo que ha avanzado considerablemente en los últimos años ha sido la fragmentación regional de la conciencia histórica en el contexto de la consolidación institucional de identidades regionales de las diecisiete Comunidades Autónomas, con gobiernos que apenas dejan pasar una oportunidad para promover en lo cultural, histórico o lingüístico, una identidad regional (o bien, en su caso, nacional).<sup>21</sup> No obstante, se hace también con ello patente el que, al menos, ha sido exitosa la solución a la cuestión nacional prevista en la Constitución en forma de un Estado de las Autonomías. Si se prescinde del problema del nacionalismo radical vasco, la coexistencia pacífica de las comunidades regionales en el Estado español descansa sobre una base relativamente sólida. La Constitución de 1978 representa para la gran mayoría de los españoles una seña de identidad propia de la España democrática al haberse convertido no sólo en expresión de la superación de la dictadura franquista sino también, y sobre todo, en garante de la pluralidad cultural y lingüística del país.

A diferencia de muchos líderes políticos nacionalistas, la mayoría de los ciudadanos emite juicios positivos sobre el Estado de las Autonomías, pues celebran las ventajas de la descentralización: más participación, más cercanía ciudadana, soluciones administrativas más rápidas y eficientes. Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría de los españoles se pronuncia claramente a favor del Estado de las Autonomías en comparación con un estado centralista. Y preguntados por el grado de confianza que tienen en sus instituciones, los gobiernos de las Comunidades Autónomas se sitúan por lo general en el tercer puesto, siguiendo a la Monarquía y al Defensor del Pueblo y por delante de otras instituciones a nivel estatal, autonómico o local. En los esenciales aspectos institucionales, el Estado

---

21 Sobre la historiografía de y en las Comunidades Autónomas, cf. Huovinen/Sáez-Arce 2000; y también Riviére Gómez 2000.

Autonómico en los últimos 25 años ha conseguido una notable consolidación (cf. Hildenbrand Scheid 2008).

La radicalización de posturas políticas de muchos líderes nacionalistas que querrían que los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas reclamen para sí una única identidad, a saber la nacionalista, rechazando la española, no se corresponde con la conciencia subjetiva autonómica.<sup>22</sup> Pues, aunque esta conciencia autonómica ha experimentado notables cambios en los últimos 30 años, en términos generales se puede decir que ha habido y sigue habiendo una identificación doble, tanto regional como nacional, si bien con claras diferenciaciones de una comunidad a otra y con alzas y bajas a lo largo de las tres décadas pasadas (cf. Fundación FOESSA 1994). Manuel García Ferrando, Eduardo López-Aranguren y Miguel Beltrán (1994) han identificado en sus investigaciones sobre la conciencia nacional y regional nueve diferentes dimensiones del fenómeno regionalista. Los resultados son muy diferenciados, pero en su conjunto permiten reconocer que la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con el Estado de las Autonomías.

Con respecto a las teorías de las ciencias sociales expuestas más arriba, según las que en una sociedad democrática los puntos conflictivos deben ser «procesados», se puede decir que apenas habrá habido otro tema que se haya debatido más intensa y polémicamente que el de los Estatutos de Autonomía. Las divergencias acerca de las competencias y los límites de las Comunidades Autónomas son extremadamente profundas entre conservadores y socialistas, pero también entre los nacionalistas periféricos y los representantes de Madrid. En muchos casos, las diferencias tienen que ser dirimidas por el Tribunal Constitucional. Este supremo órgano hasta ahora ha tenido la autoridad de hacer respetar sus fallos: una prueba más de que, por muy agrias que sean las polémicas entre los partidos, los debates se mantienen en el marco de los límites constitucionales. Y las decisiones del Tribunal Constitucional siguen abarcando la totalidad del territorio nacional.

---

22 Para lo que sigue, cf. Hildenbrand Scheid 1998.

## Reflexión final

Si se suman los tres ejemplos, esbozados brevemente, se puede decir que el balance de la experiencia de más de 30 años de estabilidad constitucional ha sido muy positivo para la gran mayoría de los españoles. España tiene hoy un sistema político y social con el que todos han ganado. Ninguna Comunidad Autónoma ha quedado al margen, los niveles de bienestar de la media de los ciudadanos se han elevado, el prestigio internacional de España ha ascendido de forma impresionante. Todo ello ha llevado a un grado de continuidad y de integración de los ciudadanos en el sistema político, que está en condiciones de abordar los desequilibrios y de combatir las tendencias centrífugas (cf. Iglesias 2008: 735).

También la confianza en la democracia ha aumentado sustancialmente. Todavía en 1981, a la proposición «la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno», sólo un 40% respondía afirmativamente; en 2009, el porcentaje de apoyo ya ascendía casi al 90%. Por lo tanto, el actual sistema político español ha alcanzado entretanto un alto porcentaje de legitimación democrática (*ibid.*: 703).<sup>23</sup> Ello se corresponde con las reflexiones de Max Weber (1976) según el cual la fe en la legitimidad de un orden establecido democráticamente es, para una sociedad que ha superado una longeva dictadura, un factor importante de cohesión. El análisis weberiano acerca de sociedades integradas en un sistema político por medio de la democracia ha resultado ser correcto, si bien por otro lado ha infraestimado la importancia de diferencias intrasociales y étnicas como factores de una posible desintegración. En el caso español, todavía parecen prevalecer los argumentos a favor de permanecer unidos, lo que se deberá también al hecho de poder apreciar correctamente el alto valor que significa vivir en un Estado democrático de derecho, después de haber sufrido por tanto tiempo una dictadura.

Para la gran mayoría de los españoles, los dos defectos que habían lastrado la Historia contemporánea del país, el «común irrespeto a la ley» y el «débil sentido de comunidad» —por decirlo en palabras de José María Jover Zamora—, han sido superados por el pacto constitucional de

---

23 Cifras proporcionadas por Belén Barreiro, Presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el Simposio Internacional sobre «España a la búsqueda de su camino» en abril de 2009 en Berlín.

1978 y por el Estado de las Autonomías, siendo probablemente el mayor logro del siglo xx español la Constitución de 1978 en la que todos los españoles tuvieron y siguen teniendo cabida, de la que nadie fue excluido y en la que el consenso y el entendimiento parecían haber terminado definitivamente con los demonios interiores (cf. Iglesias 2008: 725).

Naturalmente, todos estos argumentos no quieren decir que en España no exista un riesgo de desintegración. Muy al contrario, este riesgo está muy presente en algunas partes del país. Pero lo que sí expresan los ejemplos antes expuestos es que España está bien equipada para oponerse con fuerza a posibles retos desintegradores.

## Bibliografía

- ÁLVAREZ JUNCO, José (2001): *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo xix*. Madrid: Taurus.
- BERNECKER, Walther L. et al. (eds.) (1990): *Spanien-Lexikon*. München: Beck.
- /MAIHOLD, Günther (eds.) (2007): *España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert.
- BREUER, Toni (2008): «Der geographische Raum: ausgewählte aktuelle Nutzungen und Konflikte», en: Bernecker, Walther L. (ed.): *Spanien heute. Politik, Wirtschaft, Kultur*. Frankfurt am Main: Vervuert, 11-51.
- DÍEZ MEDRANO, Juan (1995): *La opinión pública y la integración europea: 1994*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- DÍEZ MEDRANO, Juan (2007): «La opinión pública española y la integración europea (1986-2006)», en: Morata, Francesc/Mateo, Gemma (eds.): *España en Europa. Europa en España*. Barcelona: CIDOB, 205-233.
- DUBIEL, Helmut (1997): «Unversöhnlichkeit und Demokratie», en: Heitmeyer, Wilhelm (ed.): *Was hält die Gesellschaft zusammen?* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 425-444.
- FREY, Peter (1984): *Spanien und Europa. Die spanischen Intellektuellen und die europäische Integration*. Bonn: Europa Union Verlag.
- FUNDACIÓN ALTERNATIVAS (2007): «Informe sobre la Democracia en España/2007. La estrategia de la crispación», en: <<http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2007-la-estrategia-de-la-crispacion-version-en-espanol>> (última consulta: 23-XII-2008).
- FUNDACIÓN FOESSA (1994): *V Informe sociológico sobre la situación social en España*. Madrid: Foessa.
- FUSI, Juan Pablo/PALAFOS, Juan (1997): *España 1808-1996: el desafío de la modernidad*. Madrid: Espasa.
- GARCÍA FERRANDO, Manuel/LÓPEZ-ARANGUREN, Eduardo/BELTRÁN, Miguel (1994): *La conciencia nacional y regional en la España de las autonomías*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- HILDENBRAND SCHEID, Andreas (1998): «Regionalismus und Autonomiestaat (1977-1997)», en: Bernecker, Walther L./Dirscherl, Klaus (eds.): *Spanien heute*. Frankfurt am Main: Vervuert, 101-139.
- (2008): «Der Autonomiestaat während der PSOE-Regierung unter José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008)», en: Bernecker, Walther L. (ed.): *Spanien heute. Politik, Wirtschaft, Kultur*. Frankfurt am Main: Vervuert, 133-167.
- HIRSCHMAN, Albert O. (1994): «Wie viel Gemeinsinn braucht die liberale Gesellschaft?», en: *Leviathan*, núm. 2, 293-304.
- HUOVINEN, Anja/SÁEZ-ARCE, Antonio (2000): «Integration der Regionen, Vernetzung der Eliten: Perspektiven der Regionalgeschichte in Spanien (1750-1850)», en: Brakensiek, Stefan/Flügel, Axel (eds.): *Regionalgeschichte in Europa*. Paderborn: Schöningh, 45-65.
- IGLESIAS, Carmen (2008): *No siempre lo peor es cierto*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- IMBUSCH, Peter (2008): «Einführung», en: Imbusch, Peter/Heitmeyer, Wilhelm (eds.): *Integration – Desintegration. Ein Reader zur Ordnungsproblematik moderner Gesellschaften*. Wiesbaden: VS-Verlag, 121-127.
- /RUCHT, Dieter (2005): «Integration und Desintegration in modernen Gesellschaften», en: Heitmeyer, Wilhelm/Imbusch, Peter (eds.): *Integrationspotentiale einer modernen Gesellschaft*. Wiesbaden: VS-Verlag, 13-71.
- KLEINER-LIEBAU, Désirée (en prensa): *Migration and the Construction of National Identity in Spain*. Freiburg im Breisgau.
- LACASTA-ZABALZA, José Ignacio (1999): «Tiempos difíciles para el patriotismo constitucional español», en: *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, núm. 2, 58 p. <<http://www.uv.es/~afd/CEFD/2/Lacasta.html>>.
- LAÍN ENTRALGO, Pedro (2000): «Epílogo», en: Real Academia de la Historia (ed.): *España como nación*. Barcelona: Planeta, 251-253.
- LUHMANN, Niklas (1987): «Was ist Kommunikation?», en: *Information Philosophie*, núm. I, 4-16.
- MOLINES, César (2009): «España y la Historia (así, con mayúscula)», en: *El País*, 17 de marzo, 27.
- NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel (2001): «What is Spanish nationalism today? From legitimacy crisis to unfulfilled renovation (1975-2000)», en: *Ethnic and Racial Studies*, núm. 24, 719-752.
- (1997): *España: reflexiones sobre el ser de España*. Madrid: Real Academia de la Historia.
- RIQUER I PERMANYER, Borja de (2001): *Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal*. Madrid: Marcial Pons.
- RIVIÈRE GÓMEZ, Aurora (2000): «Envejecimiento del presente y dramatización del pasado. Una aproximación a las síntesis históricas de las Comunidades Autónomas españolas (1975-1995)», en: Pérez Garzón, Juan Sisinio et al.: *La gestión de la memoria*. Barcelona: Crítica, 161-219.
- SANDER, Uwe/HEITMEYER, Wilhelm (1997): «Was leisten Integrationsmodi?», en: Heitmeyer, Wilhelm (ed.): *Was hält die Gesellschaft zusammen?* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 447-482.

- SCHIFFAUER, Werner (2008): *Parallelgesellschaften. Wieviel Wertekonsens braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz*. Bielefeld: transcript Verlag.
- SEGURA, Antoni (2001) (ed.): *Els llibres d'història. L'ensenyament de la història i altres històries*. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
- VALLS, Rafael (1998): «Die Funktionalisierung der Geschichte im Unterricht oder Was will die spanische Erziehungsministerin», en: Radkau García, Verena/Pérez Siller, Javier (eds.): *Identitäten – Mythen – Rituale. Beispiele zum Umgang mit der Nation aus Lateinamerika und Spanien*. Hannover: Hahn, 133-143.
- VELASCO ARROYO, Juan Carlos (2001): «Los contextos del patriotismo constitucional», en: *Cuadernos de Alzate*, núm. 24, 63-78.
- WEBER, Max (1976): *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie*. Tübingen: Mohr.